JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SUP-JIN-529/2025

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA¹

Ciudad de México, *** de agosto de dos mil veinticinco.

Sentencia que, con motivo de la demanda presentada por **Omar Alberto Mejía Ceballos**, confirma la elección de un magistrado de circuito en materia civil, correspondiente al distrito judicial 01 en el estado de México, aprobada por el **Consejo General del Instituto Nacional Electoral**.²

ÍNDICE

GLOSARIO	1
I. ANTECEDENTES	2
II. COMPETENCIA	3
III. PRESUPUESTOS PROCESALES	3
IV. ESTUDIO DE FONDO	4
V. RESOLUTIVO.....	9

GLOSARIO

Actor:	Omar Alberto Mejía Ceballos (candidato a magistrado de circuito en materia civil del Distrito 1 del Estado de México).
Autoridad responsable:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Consejo local:	Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de México.
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CG:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
DOF:	Diario Oficial de la Federación.
INE:	Instituto Nacional Electoral.
Ley Electoral:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ley Orgánica:	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
PEE:	Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para la elección de diversos cargos de personas juzgadoras.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tribunal Electoral:	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹ **Secretario instructor:** Fernando Ramírez Barrios. **Secretariado:** Nancy Correa Alfaro e Isaías Trejo Sánchez, Nayelli Oviedo Gonzaga y Jaquelin Veneroso Segura.

² INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025.

I. ANTECEDENTES

1. Jornada electoral. El uno de junio de dos mil veinticinco³, se llevó a cabo la jornada electoral del PEE.

2. Cómputo Estatal. El doce de junio, el Consejo local concluyó el cómputo correspondiente a la elección de magistraturas de circuito en el Estado de México, con los siguientes resultados:

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRATURA EN MATERIA CIVIL			
NOMBRE	PODER POSTULANTE	VOTACIÓN	DIFERENCIA
ARCHUNDIA PEREZ ALEJANDRO GABRIEL	PE	131,537	Diferencia entre 1o y 2o lugar: 47,486= 0.86%
MEJIA CEBALLOS OMAR ALBERTO (Actor)	PE	84,051	
Votos nulos		740,055	
Recuadros no utilizados		762,665	
TOTAL		5,506,210	

3. Declaratoria de validez. El uno de julio se publicaron los acuerdos por los que Consejo General del INE emite la sumatoria nacional y asignación de personas que obtuvieron mayor número de votos, así como la declaración de validez y las constancias de mayoría de la elección de las personas magistradas de Circuito.

4. Juicio de inconformidad. El cuatro de julio, el actor controvertió la elegibilidad del candidato electo Gabriel Archundia Perez Alejandro, supuestamente por no cumplir el promedio de nueve en las materias vinculadas con la especialidad.

5. Turno. La presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente **SUP-JIN-529/2025** y turnarlo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

6. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó y admitió la demanda respectiva y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción, ordenando la elaboración del proyecto de sentencia.

³ En adelante las fechas corresponden a dos mil veinticinco, salvo mención diversa.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente⁴ para conocer y resolver el presente medio de impugnación, porque se trata de juicio de inconformidad en el que una candidatura controvierte la elección de un magistrado de Circuito, en el marco del PEE 2024-2025 para renovar diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

La demanda cumple los requisitos ordinarios y especiales para dictar una sentencia de fondo.

A. Requisitos ordinarios⁵

1. Formales. Señala: **i)** el nombre del actor; **ii)** identifica el acto impugnado; **iii)** menciona a la autoridad responsable; **iv)** narra los hechos en que se sustenta la impugnación; **v)** expresa agravios; y, **vi)** se asienta nombre, firma autógrafa y calidad jurídica con la que se promueve.

2. Oportunidad. La demanda se presentó de forma oportuna, toda vez que los acuerdos relativos a la sumatoria nacional, asignación de cargos paritarios y la declaratoria de validez se publicaron el uno de julio,⁶ de ahí que, si la demanda se presentó el cuatro de julio, es evidente que está dentro del plazo legal de cuatro días.⁷

⁴ Conforme a lo previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución general, en relación con lo previsto en los artículos 256, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica, así como los artículos 50, numeral 1, inciso f) y 53, numeral 1, inciso c), ambos de la Ley de Medios.

⁵ Artículo 9 de la Ley de Medios.

⁶ Acuerdo INE/CG572/2025, publicado en la Gaceta Electoral del INE, en el siguiente vínculo electrónico:

<https://portal.ine.mx/gaceta-electoral-no-94/>

Acuerdo INE/CG572/2025 publicado en el DOF, en el siguiente vínculo electrónico:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5761760&fecha=01/07/2025#gsc.tab=0

⁷ Artículo 7, párrafo 1, de la Ley de Medios.

3. Legitimación. La parte actora tiene legitimación, por tratarse de una candidatura que controvierte la elegibilidad de un magistrado de Circuito en materia civil en el distrito judicial 1 del estado de México.

4. Interés jurídico. El actor tiene interés jurídico para promover el juicio de inconformidad, porque fue candidato en la elección controvertida.

B. Requisitos especiales.⁸ Se cumple pues la demanda señala la elección que se impugna, siendo específicos en cuanto a que se objeta la validez de la elección de un magistrado de Circuito en el estado de México.

IV. ESTUDIO DE FONDO

Falta de elegibilidad e idoneidad del candidato declarado ganador.

1) Agravio

El actor pretende que se declare inelegible al candidato electo Gabriel Archundia Perez Alejandro debido a que, a su decir, no cuenta con el promedio de 9 (nueve) en materias afines al cargo para el que se postuló, que fue una magistratura civil.

Sostiene que los criterios metodológicos establecidos por el INE para verificar el cumplimiento de los promedios no deben aplicarse, ya que fueron emitidos de forma extemporánea, implican una aplicación retroactiva y se sustentan en una interpretación incorrecta del requisito constitucional.

Señala que el INE tomó en cuenta materias que no guardan relación directa con la materia civil, que son las de Derecho Notarial y Registral y Derecho Cooperativo.

Agrega que el candidato ganador fue de los que, en la sesión del Consejo General del INE del quince de junio, la consejera Carla Humphrey acusó que no cumplía con el promedio de nueve, aunque en la versión estenográfica no se le mencione.

⁸ Artículo 50, párrafo 1, inciso f), fracción I, de la Ley de Medios.

Refiere que el candidato no presentó un historial académico que acredite un promedio mínimo de 8 en general y 9 en materias relacionadas con el cargo ni incluyó copia de algún título profesional.

Finalmente, informa que solicitó directamente al Poder Judicial de la Federación y a la Universidad Autónoma del Estado de México la información académica del candidato, y pide a este Tribunal requiera el Kardex a ambas instituciones para verificar el incumplimiento del requisito de elegibilidad.

2) Decisión

El agravio es **inatendible** porque, aunque el actor cuestiona con razón los criterios del INE, su pretensión de que esta Sala los sustituya por una nueva evaluación es improcedente. Además, no acreditó que el candidato electo incumpliera con los requisitos, sino que realiza afirmaciones genéricas.

3) Justificación

a. Marco jurídico

En primer lugar, es indispensable distinguir con claridad entre requisitos de elegibilidad y requisitos de idoneidad, dado que ambos tienen naturalezas, funciones y mecanismos de verificación distintos, así como autoridades competentes diferenciadas.

Los **requisitos de elegibilidad** son aquellos que la Constitución y las leyes establecen como condiciones objetivas, medibles y previamente determinadas para que una persona pueda contender por un cargo público.

Entre estos requisitos se encuentran la nacionalidad, la edad, la residencia, el no haber sido condenado por delito doloso, entre otros. Estos requisitos **son verificables ex ante y su cumplimiento puede ser constatado por la autoridad electoral al momento de registrar candidaturas o calificar los resultados de una elección**. En el caso de jueces y magistrados estos requisitos están previstos, por ejemplo, en los artículos 97 y 116 de la Constitución.

Por otra parte, los **requisitos de idoneidad** son de carácter cualitativo, técnico y valorativo. No se refieren simplemente a condiciones objetivas, sino a la evaluación de competencias, capacidades, méritos, trayectoria, formación y ética profesional de las personas aspirantes.

Su cumplimiento no es susceptible de verificarse a través de criterios mecánicos o registrales, sino que requiere procesos especializados de evaluación técnica y valorativa, como entrevistas análisis curricular exámenes o deliberación colegiada.

En el caso del sistema mexicano, el artículo 96 de la Constitución establece que corresponde a los comités de evaluación de los tres Poderes en la Unión, proponer las ternas de personas juzgadoras, asegurando que quienes las integran cuenten con la idoneidad requerida para desempeñar el cargo.

De modo que, la revisión de los aspectos técnicos para acreditar la idoneidad de las personas que serían postuladas para los diversos cargos el Poder Judicial de la Federación, corresponde de manera exclusiva a los comités de evaluación, por disposición expresa del Órgano Reformador de la Constitución.

Estos comités, por tanto, son los órganos facultados para verificar la idoneidad en los términos constitucionales no así el INE.

En efecto, **el INE**, en su calidad de autoridad encargada de organizar y calificar la elección, **sólo puede revisar los requisitos de elegibilidad**, pues son condiciones de legalidad objetiva y verificable que inciden en la validez formal de la candidatura.

Por tanto, **no le corresponde evaluar la idoneidad de quienes hayan sido postulados**, ya que dicha valoración fue realizada por el comité evaluador conforme a un procedimiento constitucionalmente previsto.

Cualquier intento por parte del INE de calificar o invalidar una candidatura con base en juicios subjetivos sobre la idoneidad, implicaría invadir atribuciones exclusivas del comité constitucionalmente facultado para ello

y, por tanto, violar los principios de legalidad división de poderes y certeza electoral.

En conclusión, la función del INE se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, sin poder interferir ni reinterpretar las determinaciones sobre idoneidad adoptadas por los comités evaluadores de los tres Poderes de la Unión

- **Línea jurisprudencial de la Sala Superior respecto a la revisión de aspectos técnicos en procesos de selección**

En el caso particular del proceso de la elección de personas juzgadoras, esta Sala Superior en diversos precedentes ha señalado que los Comités de Evaluación cuentan con facultades discrecionales y que las autoridades electorales no pueden tener injerencia en aspectos técnicos.⁹

En concreto, al resolver el SUP-JDC-18/2025 y acumulados este órgano jurisdiccional sostuvo que el promedio de nueve debe obtenerse como media aritmética de todas las materias relacionadas con la especialidad y admite su acreditación con estudios de posgrado afines.

En ese precedente la Sala Superior recordó que el texto del artículo 97 constitucional “establece únicamente dos promedios que deben verificarse” (ocho y nueve puntos) y que cualquier fase adicional —aunque persiga un fin deseable— eleva artificialmente el estándar de elegibilidad y es inconstitucional.

b. Caso concreto

En el caso, el actor impugna que el candidato electo, Archundia Perez Alejandro, incumple con el promedio de 9 en materias afines al cargo de magistrado civil, y que los criterios utilizados por el INE se emitieron a destiempo y consideraron materias que no estaban vinculadas.

⁹ Así se resolvió en relación con el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo en el SUP-JDC-1158/2024 y acumulados, o bien, en el SUP-JDC-41/2025 y acumulados.

Al respecto, se advierte que, en el dictamen de verificación del cumplimiento de los requisitos, el INE consideró que el candidato cumplía con el promedio de 9 porque en las materias de DERECHO CIVIL IV, DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL y DERECHO COOPERATIVO obtuvo un promedio de 9, 10, 10, por lo que el promedio general fue de 9.67.

Ahora conforme a lo relatado en el marco jurídico, esta Sala Superior advierte que el agravio es inatendible porque, aunque el actor acierta al señalar que los criterios metodológicos aplicados por el INE carecen de respaldo jurídico, la pretensión que plantea -esto es, que esta Sala sustituya dichos criterios por una nueva evaluación- resulta jurídicamente inviable.

Ni la Constitución ni la convocatoria emitida por el Senado ni la del Poder Ejecutivo¹⁰ -que es por la que se postuló el candidato- establecieron un método para calcular el promedio de 9 en materias relacionadas con el cargo, ni facultan a esta Sala para definirlo.

Esto porque si bien dentro de las facultades del INE está la de revisar los requisitos de elegibilidad de las candidaturas previo a la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez; lo cierto es que resulta ilógico que impusiera un nuevo criterio de revisión o ponderación de materias afines a la especialización de los cargos que se buscan ocupar.

Máxime que la responsable únicamente publicó un anexo en el que contiene las hojas de revisión de las personas candidatas a magistraturas de circuito, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE en el que, dependiendo el caso, se tomaron en consideración diversas

¹⁰ La Convocatoria del Poder Ejecutivo únicamente establece en la Base Primera que uno de los requisitos para ocupar ser electa persona juzgadora era presentar el certificado de estudios o historial académico:

PRIMERA. Cargos a elegir, requisitos, documentos para acreditarlos y ámbito territorial electivo.(...)

c. Requisitos y documentos de acreditación (...)

II. (...)

d) **Certificado de estudios o de historial académico de licenciatura y, en su caso, estudios de posgrado, en los que se puedan apreciar las calificaciones obtenidas por grado y materia.**

materias dependiendo de la persona, sin fundamentar o motivar las razones por las cuales se tomaron como base para generar el promedio respectivo.

En ese sentido, aun cuando el actor tiene razón en que el INE excedió su facultad de verificación, al aplicar criterios que van más allá de los parámetros bajo los cuales ya se evaluaron los perfiles y se aprobaron las candidaturas, no puede esta Sala incurrir en el mismo vicio, sustituyendo la evaluación previamente realizada por el Comité del Poder Ejecutivo de acuerdo con el marco normativo aplicable y validada conforme a las reglas vigentes, sin que en esta instancia demuestre que el candidato electo incumplió con el promedio exigido.

También es ineficaz el alegato referente a que el candidato electo no presentó el título profesional, porque se trata de un planteamiento genérico, aunado que ese aspecto debió ser valorado en su oportunidad por el Comité del Poder Ejecutivo por lo que existe presunción de su cumplimiento, por tanto, cualquier manifestación en contrario, corresponde a quien lo afirma probarlo.

En el caso, el actor se limita a señalar que no lo cumple y pretende que esta Sala requiera la información respectiva, sin embargo, esa pretensión es inatendible porque ha quedado claro que esta Sala Superior no tiene atribuciones para revisar cuestiones técnicas respecto a calificaciones que debían desarrollar los comités de evaluación.

Por tales razones, carece de sustento lo que señala el actor y, por ello, debe confirmarse la elegibilidad del candidato electo.

En consecuencia, al haberse desestimado los agravios, lo procedente es confirmar los acuerdos impugnados.

Por lo expuesto y fundado se aprueba el siguiente:

V. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se **confirman** los acuerdos impugnados.

Notifíquese como en derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido y, en su caso, devuélvase la documentación atinente.

Así, por ***** de votos, lo resolvieron, las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos quien autoriza y da fe de que la presente resolución se firmó de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

NOTA PARA EL LECTOR

El presente proyecto de sentencia se publica a solicitud del magistrado ponente, en términos del Acuerdo General 9/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos para la publicación de los proyectos de resolución por parte de los integrantes del Pleno de las Salas de este Tribunal Electoral.

Este proyecto se circula para efectos de trabajo y discusión entre las ponencias. Su contenido no es obligatorio para ninguna de las magistradas ni magistrados de este TEPJF, incluyendo al Ponente. **Por tanto, es totalmente modificable.** * Consultar la nota para el lector adjunta a este proyecto.